América Latina: 4,555 mujeres víctimas de feminicidio

Por: Elda Montiel
Globalizacion, 30 de junio 2021
SEMlac

Región: América Latina, Caribe
Tema: Delincuencia y crimen organizado, Derechos humanos

América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, ya que alberga solo al nueve por ciento de la población mundial, pero actualmente representa 34 por ciento del total de muertes violentas. Los países de la región, entre los que se encuentra México, tienen las tasas de homicidios más altas que las naciones con niveles de desigualdad similares. Los índices de violencia contra las mujeres y las niñas son abrumadores.

Tan solo en 2018, 4.555 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 18 países de América Latina, de acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Los países también luchan contra formas de violencia no letales, incluida la violencia sexual, los robos, el abuso policial y la trata de personas.

En el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 «Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe», lanzado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se analiza «la trampa en la que se encuentra sumida la región que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible».

La pandemia de covid-19 ha generado una crisis económica que afecta principalmente a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, al colocarlas en situación de riesgo dentro de sus propios hogares.

El cuarto Informe de Desarrollo Humano advierte que, si bien la desigualdad causa mayor violencia, esta última también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las mujeres, minorías étnicas y de género, lo que contribuye a perpetuar su estado de privación.

La violencia social y doméstica presenta elevados niveles de violencia sexual, feminicidio y violencia contra niñas y niños, lo que ha sido un área de creciente preocupación durante los confinamientos a raíz del covid-19.
La región tiene la tercera prevalencia más alta de violencia sexual a lo largo de la vida perpetrada por personas que no son la pareja y la segunda prevalencia más elevada de violencia a lo largo de la vida cometida por la pareja.

La violencia contra minorías sexuales es también una de las más altas en el mundo.

El informe destaca que la violencia homicida en la región también varía mucho al interior de los países. Por ejemplo, refiere que algunos estados y ciudades de México tienen tasas de

homicidio superiores a 200 por cada 100.000 habitantes, mientras que otros tienen tasas inferiores a dos, y algunas regiones de Chile registran tres homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que otras tienen de una tasa de 0,5.

La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.

Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.
Las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas deben adoptar un enfoque integral que incluya la prevención, la atención, la sanción y la reparación.

Establecer sistemas de justicia independiente y eficaz, capaz de salvaguardar los derechos humanos, facilitar el acceso a la justicia para todos sin discriminación y proporcionar servicios transparentes y objetivos es fundamental para combatir la violencia eficazmente.

Al no permitir que los delitos queden impunes y prevenir la revictimización, el sistema judicial elevaría el costo de cometer crímenes.

Estos sistemas deben responder adecuadamente a las necesidades diferenciadas, por ejemplo, construyendo capacidad para abordar mejor la violencia contra las mujeres, las personas LGBT+ y los grupos étnicos mediante una clasificación más detallada de los crímenes en las estructuras jurídicas y mediante el entrenamiento.

Este enfoque también debe integrar perspectivas económicas, sociales, culturales y de justicia para enfrentar el problema a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida de las mujeres.

Destaca que, si se abordan con éxito, los avances en la lucha contra la violencia pueden allanar el camino hacia sociedades más equitativas, más productivas y pacíficas.

El narcotráfico triplicó en 10 años la tasa de homicidio en México

De los datos sobre la violencia en la región destaca, que en las últimas dos décadas el crimen organizado en la región se ha vuelto cada vez más violento.

Debido a la inestabilidad y la subsiguiente escisión de las organizaciones narcotraficantes mexicanas y sus enfrentamientos entre sí y con las autoridades estatales tras los cambios en el entorno político, la tasa de homicidio del país se triplicó en 10 años.

Al mismo tiempo, el enfoque internacional de reprimir las redes de narcotráfico colombianas y mexicanas empujó al crimen organizado a expandirse hacia América Central para establecer nuevas rutas para sus operaciones de tráfico.

También refiere el documento que la violencia o la amenaza de violencia se ha convertido en moneda de negociación entre actores estatales y no estatales en diversos contextos para alcanzar y sostener acuerdos, y es parte fundamental de la lucha por la distribución de recursos, derechos, oportunidades y poder en esta área geográfica.

Asimismo, la región aún lucha con la violencia política, que incluye protestas violentas, actos de violencia estatal como brutalidad policial, ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas, y violencia contra defensores de derechos humanos, activistas ambientales, políticos y periodistas.

Dada la prevalencia de la violencia y sus graves repercusiones en el desarrollo humano, la zona necesita desesperadamente más y mejores datos especialmente sobre las formas más graves de la violencia que la afligen.

La militarización en países como México incrementó la violencia

Las agresiones llevadas a cabo por las fuerzas armadas también se han intensificado tras la decisión de algunos países de militarizar las tareas de seguridad pública, lo que ha provocado un aumento de la violencia en Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.

También se menciona a México entre los países con protestas violentas que se dieron entre 2000 y 2019. En América del Sur fueron más comunes en Bolivia, Brasil y Venezuela. La mayoría de las protestas violentas en América Central se produjeron en Honduras y Nicaragua.

México se encuentra entre los países con mayor número de protestas violentas junto con Nicaragua y Brasil, solo superadas por Haití y Venezuela.

La mayoría de los casos de defensores de los derechos humanos asesinados se han producido en Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México.
Cientos de políticos mexicanos han sido asesinados por organizaciones narcotraficantes.

Se estima que 450 periodistas fueron asesinados o desaparecidos en la región entre 2000 y 2017; Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y México son los países más peligrosos para esa profesión.

México se encuentra entre los cuatro países, después de Perú y Ecuador, Uruguay con mayor porcentaje de ciudadanos que afirman haber sido víctimas de un delito en 12 meses.

Los costos de la violencia

La violencia tiene la capacidad de distorsionar la asignación de recursos públicos y privados, contribuyendo de esta forma a la persistencia de la desigualdad.

Se estima que los costos directos e indirectos del crimen en la región son alrededor del tres por ciento del PIB en el país promedio y en más del seis por ciento en los países más violentos de América Central.

El Banco Mundial estima que los costos relacionados con los gastos médicos, la pérdida de productividad y el gasto público en seguridad ascienden al 3,7 por ciento de la producción anual. Esto representa un desperdicio sustancial de los recursos públicos que se necesitan para la defensa, la policía, los programas de prevención y el castigo.

Elda Montiel

La fuente original de este artículo es SEMlac
Derechos de autor © Elda Montiel, SEMlac, 2021

Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: **Elda Montiel**

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: publications@globalresearch.ca